

AMPARO:

Juicio promovido en el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Ramon Espinosa, contra el Juez 4º de paz de la capital por prision arbitraria.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Reseñados por el que suscribe en su pedimento de 3 del corriente, los hechos que motivan el presente juicio de amparo y proteccion, promovido por el C. Ramon Espinosa contra la determinacion del juez 4º de paz de esta ciudad, que lo puso preso á disposicion de la Gefatura política del partido, para remitirlo al juez de igual grado de ciudad García, quien lo exhortó por providencia dictada en la demanda por fraude de D. José M. Amozurrutia; y estimado en su valor legal el informe que el funcionario responsable rindió en 29 de Junio pasado sobre lo principal de la queja de Espinosa, sosteniendo ser legítimo su procedimiento conforme al art. 65 de la ley de 30 de Noviembre de 1855, y en consecuencia, que debe ejecutarse la remision de Espinosa al juez 4º de paz de ciudad García, porque ademas de que ha procedido en virtud de una requisitoria legal á la aprehension de la persona del quejoso, acusado de un delito y no de deuda puramente civil, no hay violacion de las garantías individuales, el Promotor esperaba que, pedido durante el término de prueba al juez 4º de paz de ciudad García, el exhorto original que libró al de igual clase de esta ciudad contra Ramon Espinosa, é informe á la vez del origen y naturaleza de la demanda interpuesta contra dicho Espinosa por D. José M. Amozurrutia, obsequiando lo dispuesto por el art. 12 de la ley de 20 de Enero de 1869, el juez expresado hubiera proporcionado con la oportunidad necesaria las constancias que se le han pedido como prueba en este recurso, para estimarlas legalmen-

te al pedir en definitiva sobre el amparo solicitado. Mas habiendo pasado con exeso el término legal, sin que el juez de ciudad García haya cumplido con la prevencion de la ley orgánica citada, no obstante el requerimiento que se le hizo por auto de 4 del corriente, el representante del Ministerio público, ateniéndose á los datos que obran en autos, va á esponer las razones y fundamentos que, en su opinion hacen axequible y de conceder el amparo pedido por Ramon Espinosa.

Ha asentado este en su queja, que teniendo con D. José M. Amozurrutia una deuda de carácter puramente civil, la prision decretada por el juez 4º de paz de ciudad García y ejecutada por el de igual clase de esta, viola las garantías que protejen los artículos 16, 17 y 18 de la Constitucion general. El funcionario responsable en el informe rendido con justificacion, trascribió el exhorto del requerente, en el cual se expresa, que habiéndose presentado Amozurrutia acusando *de fraude* á Espinosa, se mandó librar exhorto para la aprehension y remision del acusado.

Ahora bien; como el juez 4º de paz de ciudad García, no ha informado sobre el origen y naturaleza de la demanda puesta ante él por el Sr. Amozurrutia contra el quejoso, los términos en que está concebido el exhorto que ha tratado de ejecutarse, y la exposicion de los hechos que contiene el ocuso de amparo, demuestran que la deuda porque se acusa á Espinosa no tiene mas carácter de fraudulenta que lo tardío del pago, y la circunstancia de haberse venido á esta ciudad sin haberla satisfecho; pero esas mismas circunstancias, por mas que se quiera, no le quitan su carácter de meramente civil, y comprendida por lo mismo en la disposicion del art. 17 de la Constitucion general.

Por otra parte; y aun admitiendo que hubiera méritos para la averiguacion del delito de fraude contra el quejoso, ya previniendo el delito de la deuda que él mismo

confiesa tener con Amozurrutia, ya de otro motivo cuyo origen y naturaleza se ignoran, siendo el fraude ó la estafa un delito público que se castiga con pena corporal, en juicio verbal, ante los jueces de 1ª instancia respectivos, y conforme á las prescripciones de los artículos 97 y 98 de la ley orgánica de tribunales del Estado, es indudable que en el presente caso la providencia de aprehension y remision del quejoso, fué dictada por un juez incompetente, cuyas atribuciones no alcanzan hasta conocer de las causas por delitos graves y públicos, que la ley de procedimientos encomienda á jueces de un grado superior. Así pues, aunque sea exacta la observacion en que funda su informe el juez de esta ciudad que ejecutó el acto reclamado, el cumplimiento del art. 65 de la ley orgánica de tribunales, no lo autorizaba para ejecutar la aprehension y remision de Espinosa al juez requerente; porque aunque como mero executor no debió practicar la diligencia prevenida por un juez incompetente, contra la expresa prohibicion del art. 17 de la Constitucion.

En virtud pues de lo expuesto y estando demostrado que la providencia reclamada y ejecutada por el juez 4º de paz de esta ciudad, fué dictada en un asunto puramente civil; que aunque estuviera demostrado el delito que se imputa á Espinosa, para averiguarlo y castigarlo, y á provencion reducir á prision al acusado, se ha procedido por un juez incompetente, sin facultades para el caso, el promotor fiscal concluye pidiendo al Juzgado se sirva declarar: que la justicia de la Union protege y ampara al C. Ramon Espinosa, contra el acto del juez 4º de paz de esta ciudad que, cumpliendo una requisitoria ilegal del de igual clase de ciudad García, redujo á prision al quejoso por una deuda de carácter puramente civil y lo consignaba al requerente con notoria violacion de los artículos 16, 17 y 18 del pacto fundamental de la República. Así lo estima de justicia protestando, etc.

Zacatecas, veinticinco de Julio de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Jesus M. Licona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, Julio veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Ramon Espinosa, contra la órden del C. Juez 4º de paz de esta capital, quien lo redujo á prision segun expresa el quejoso, por una deuda civil, violándose en su persona las garantías que protejen los artículos 16, 17 y 18 de la Constitucion general.

Visto el auto en que se mandó suspender provisionalmente la órden de la autoridad contra la que se pide amparo; el informe de la expresada autoridad en que expresa, procedió en cumplimiento del exhorto del C. Juez 4º de paz de ciudad García, quien pedia la aprehension de Espinosa por fraude y que se le remitiera á su juzgado, cuyo exhorto trascribe en su informe, diciendo que obró conforme á la ley de administracion de justicia del Estado de 30 de Noviembre de 1855, y que en su concepto no cabe el amparo en los negocios judiciales.

Visto el auto en que se abrió á prueba el juicio; el alegato del C. Promotor fiscal fecha 25 del corriente, en el que pide se conceda el amparo, fundado en que el Juez 4º de paz de ciudad García no tuvo facultades conforme á la ley de 30 de Noviembre de 1855 para despachar el exhorto, ni obligacion el de esta ciudad de obsequiarlo; que el fraude es un delito cuyo conocimiento corresponde á los jueces de primera instancia en el Estado, conforme á la expresada ley: que si bien el Juez de paz de ciudad García no rindió en el término de prueba el informe que se le pidió, de las constancias de autos aparece que la prision de Espinosa proviene de deuda civil y que el fraude consiste solamente en la dilacion del

pago por parto de Espinosa, habiendose violado en consecuencia las garantías que protegen los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución general.

Vista la citación para sentencia y demás constancias de estos autos.

Considerando; que las razones manifestadas por el C. Promotor demuestran claramente la violación que ha sufrido Ramon Espinosa de sus garantías, infringiéndose los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución general, y que la omisión del Juez 4º de paz de ciudad García en rendir el informe que se le pidió, confirma que el asunto pendiente contra Espinosa era puramente civil poniéndose en el exhorto la palabra fraude para conseguir la prisión de Espinosa. Atendiendo á los fundamentos legales en que se apoya el C. Promotor fiscal, á lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Constitución general y á lo prevenido en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el juzgado declara:

Primero; que la justicia de la Union protege y ampara al C. Ramon Espinosa contra la órden del C. Juez 4º de paz de esta ciudad, quien lo redujo á prisión por el exhorto del C. Juez 4º de paz de ciudad García por deuda civil, infringiendo los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución general de la República.

Segundo; remítase este juicio en revisión á la Suprema Corte de Justicia, publicándose la sentencia en el periódico oficial, y sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial con igual objeto. Hágase saber.

El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó; doy fé.—*Manuel G. Solana.*
—*Luis G. Chavez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto catorce de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Ramon Espinosa contra el Juez 4º de paz de esa ciudad que lo redujo á prisión para que fuera remitido al de igual clase de ciudad García, ante quien demandó al quejoso el C. José María Amozurrutia al pago de seis pesos, saldo de una cuenta de efectos de ropa que le fió; y

Considerando; que según se expresa el quejoso, la deuda es puramente civil: que la omisión del Juez 4º de paz de ciudad García en rendir el informe que se le pidió sobre el origen de la deuda, indica que el asunto contra Espinosa es de ese carácter y no criminal: que aun cuando esto no fuera, el Juez 4º de ciudad García no debió exhortar al Juez 4º de paz de Zacatecas, ni este cumplimentar el exhorto para reducir á prisión á Espinosa, puesto que el conocimiento de la causa relativa á esto, ya procediéndose de oficio, ó ya por acusación, no corresponde á los jueces de paz sino á los de 1ª instancia, según lo que se dispone en el capítulo 11 de la ley orgánica de administración de justicia del Estado de 20 de Noviembre de 1855: que por lo mismo se han violado en la persona del quejoso, que es vecino de Jerez, las garantías que reconocen los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución federal, abusando el Juzgado de paz de ciudad García de sus facultades; se decreta.

Primero; que se confirma la sentencia pronunciada el 28 de Julio próximo pasado por el Juzgado de Distrito de Zacatecas que declara, que la Justicia de la Union protege y ampara al C. Ramon Espinosa contra la órden del Juez 4º de paz de esa ciudad, quien lo redujo á prisión por el exhorto del C. Juez 4º de paz de ciudad García por deuda civil, infringiéndose los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución general de la República.

Segundo; remítase copia de la sentencia del Juez de Distrito al Tribunal de Justicia de Zacatecas, para que se sirva disponer

lo conveniente respecto de la responsabilidad en que puedan haber incurrido los jueces 4º de paz de Zacatecas y el de igual clase de ciudad García.

Devuélvase las actuaciones al C. Juez de Distrito de Zacatecas con copia autorizada de esta sentencia, remitiéndose lo acordado al Tribunal de Justicia del Estado para los efectos consiguientes, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Señaló copias que certifico. México Agosto veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta.*

COMISO.

Juicio seguido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon sobre comiso de diez y ocho tercios de ropa, aprehendidos á D. José Ruiloba.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El C. Promotor fiscal, haciendo aplicación de pruebas en este juicio, dijo: que se ha impuesto de los anteriores alegatos hechos por el C. jefe superior de hacienda, que hace las veces de actor y por el Sr. apoderado del que se dice dueño de los efectos, y antes de emitir su opinion en vista de esos alegatos, de las pruebas rendidas por una y otra parte y de las demás constancias que obran en estos autos desde su principio, conviene al decoro del empleo que desempeña, rectificar algunos conceptos que se expresan en el alegato del Sr. Ruiloba,

referentes á la parte que el fiscal, se dice, ha tomado en este asunto, pasando á manifestar que no es exacto, ni por un momento puede permitir que se le atribuya en el ejercicio de su noble ministerio, mas participio en los negocios que el que de suyo requiere, sin que venga al caso que exprese su opinion en este ó aquel sentido; y que si en este caso le pareció conveniente exhibir algunos documentos para justificar tales ó cuales hechos, esto lo hizo porque llegó á entender que se trataba de probar la existencia de una costumbre contra la ley; y esto como desde luego, se comprenderá, afectaba en gran manera los intereses generales de todo el país, principalmente en cuanto á lo que mira sobre el respeto y acatamiento que se debe á la ley, no siendo por esto la primera ocasion en que el esponeuto, creyendo de buena fé cumplir con su deber, ha tomado la iniciativa, ya reclamando el cumplimiento de la ley, ya como ha sucedido en el presente caso, en que era tan necesario que el fiscal tomara una parte activa en que no se desfigurara la verdad de los hechos, y sobre todo en que no se establecieran precedentes pésimos y de fatales consecuencias, no ya por lo que hace á los intereses materiales de esto ó semejante negocio, cuanto por lo que interesa á la sociedad que no se pierda por completo el respeto que se debe á la verdad; y precisamente, habiéndose de este caso, dice un célebre jurisconsulto francés, refiriéndose á los deberes de un fiscal: que esto tiene el imperioso deber de hacer y velar porque no se viole la ley ni se pierda la moral, como sucedería indefectiblemente si se hubiera dejado sin contradicción la prueba que se presentaba para comprobar una costumbre, que ahora despues resulta, que ni los mismos que lo proclamaban hacian uso de ella en sus negocios, pues que con sus mismas cartas, visadas por la Jefatura superior de hacienda, se les ha convencido de su falsedad en lo que dijeron antes ante el juez, contestando á las preguntas bajo que